



Excmo. Ayuntamiento de Valladolid
Excmo. Sr. Alcalde
Plaza Mayor, 1
47071 VALLADOLID

Asunto: Ordenanza reguladora del aparcamiento (ORA) / disconformidad con resolución sancionadora / falta de respuesta a escrito presentado

Excmo. Sr.:

De nuevo nos dirigimos a V.E. una vez recibido el informe solicitado en relación con el expediente que se tramita en esta Institución con el número **1400/2023**, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, en la queja se hacía alusión a que por D. XXX, con DNI nº XXX, se había presentado ante esa Entidad local, con fecha 12 de enero de 2023, un escrito de *“alegaciones contra la notificación de la propuesta de resolución sancionadora dictada en el Expediente nº XXX, al haber sido la misma anulada en plazo, y en consecuencia, dicte resolución en la que se acuerde la revocación de la misma, dejando sin efecto la sanción interpuesta al haber sido anulada”*.

Según manifestaciones del autor de la queja, *“transcurridos seis meses no se ha tenido resolución alguna”*.

Iniciada la investigación oportuna, se le solicitó información en relación con las cuestiones planteadas en aquella.

En atención a dicha petición de información se remitió informe, en el cual se hacía constar lo siguiente:

“Consta en nuestros archivos expediente XXX, incoado por estacionar en zona de ORA sobrepasando hasta en 30 minutos el tiempo previsto en el ticket, puesto que disponía de ticket hasta las 18:30 y la denuncia se hace a las 18:43.

Una vez notificada la denuncia, D. XXX presenta alegaciones el 13 de enero de 2023 (sic), acompañando ticket de anulación emitido a las 18:48, y por tanto, anulada en plazo.



Comprobados estos extremos se estiman las alegaciones y se archiva el expediente, integrando el mismo en el siguiente decreto de anulación de denuncias.

Consta archivado definitivamente por Decreto XXX del Concejal Delegado del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana”.

A la vista de lo informado y acreditado en el expediente, procedemos a formular las siguientes consideraciones para fundamentar jurídicamente el contenido de la presente Resolución, partiendo de los antecedentes que a continuación se resumen:

Primero.- Por ese Ayuntamiento se tramitó expediente sancionador nº XXX, incoado por estacionar en zona de ORA sobrepasando hasta en 30 minutos el tiempo previsto en el ticket, dirigido contra D. XXX.

Segundo.- Notificada la denuncia, por el denunciado se presentan alegaciones el 12 de enero de 2023, acompañando ticket de anulación en plazo.

Tercero.- Por esa Administración se estiman las alegaciones y se procede al archivo del expediente por Decreto del Sr. Concejal Delegado del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana.

Cuarto.- No consta que el citado Decreto de archivo fuera notificado a D. XXX.

El presupuesto ineludible del cumplimiento del deber legal de resolver lo constituye, sin duda alguna, el procedimiento administrativo; por lo que la resolución administrativa expresa que debe emitir la Administración requiere, por tanto, la tramitación previa del procedimiento al que la resolución pone fin. Sin embargo, el contenido esencial de este deber de resolver de la Administración no finaliza con dictar la resolución expresa, pues, además, esta debe ser notificada. No basta, por tanto, con la emisión del acto resolutorio, requiriéndose la notificación administrativa que, además, debe efectuarse con arreglo a lo que establecen los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

Este deber de resolver y notificar las resoluciones administrativas, como ya hemos indicado, se cumple cuando esta se notifica, además, en plazo y de acuerdo con lo dispuesto en apartado 2 del citado artículo 40 de la LPACAP, a cuyo tenor, *“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”.*



La notificación administrativa es una actuación principal en el procedimiento administrativo que garantiza la eficacia del acto administrativo, con incidencia incluso sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los interesados, como ha declarado de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido que los actos de notificación *“cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes”* (STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 2); teniendo la *“finalidad material de llevar al conocimiento”* de sus destinatarios los actos y resoluciones *“al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva”* sin indefensión, como garantiza en el artículo 24.1 CE (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3); en el mismo sentido, las STC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 y STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2.

En relación con las consecuencias de la notificación podemos distinguir los siguientes efectos más importantes:

- Certeza para el cómputo de los plazos.
- Marca el inicio de la vigencia del acto administrativo. La notificación señala desde cuándo la decisión orgánica existe en la vida jurídica. Para que el acto administrativo cumpla el objetivo para el cual ha sido dictado, no basta que el acto se presuma legal y que esté vigente; es necesario, además, que cumpla con los requisitos formales para ser eficaz, los cuales son, a los efectos que aquí nos interesa, la notificación según lo que establece la norma *ut supra* citada.

La obligación de notificar la resolución administrativa es el modo de publicitar los actos administrativos de efectos individuales. Su finalidad primordial es lograr que el acto administrativo sea conocido por el interesado para que pueda conocer la decisión de la Administración, bien sea para aceptarla o para reaccionar contra la misma con todas las garantías.

Por ello, la Administración tiene la responsabilidad de realizar las notificaciones con respeto a lo dispuesto en las normas que regulan los actos de comunicación, y tiene también la carga de acreditar la realidad y regularidad de las mismas.

En definitiva, la eficacia del acto administrativo dependerá de que el mismo sea comunicado al interesado con arreglo a derecho. Así pues, la notificación del acto administrativo genera certeza para el cómputo de plazos, marca el inicio de la vigencia del acto administrativo y da certeza del inicio de la eficacia externa del acto administrativo. La omisión del deber de notificar puede colocar al destinatario en una posición de indefensión y en riesgo de soportar actuaciones antijurídicas que se califican



como vías de hecho al carecer la Administración de título para ejecutar la decisión formal que ha adoptado.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, consideramos oportuno formular la siguiente **Resolución**:

ÚNICA: Que por el Ayuntamiento de Valladolid se proceda, a la mayor brevedad, a notificar a D. XXX el Decreto nº XXX, del Concejal Delegado del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, por el que se acordó el archivo del expediente nº XXX, incoado por estacionar en zona de ORA sobrepasando hasta en treinta minutos el tiempo previsto el ticket.

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN
Tomás Quintana López